

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL**



**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE JUSTICIA Y PAZ**

MAGISTRADO PONENTE: IGNACIO HUMBERTO ALFONSO BELTRÁN

Radicación : 11001225200020140005900
Postulados : Dionisio Becerra Guio alias "*Dubán, Robin*", Rito Antonio Rueda Melo alias "*Petete o Piti*", José Agustín Cañón González alias "*Miguel o Rambo*" y William Gallardo Jaimes alias "*Chiqui o Alexander*"
Asunto : Impugnación de la contabilización del término de libertad a prueba
Acta No. : 012/24
Procedencia : Juzgado con función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional
Decisión : Modificar parcialmente

Bogotá, D.C., quince (15) de marzo dos mil veinticuatro (2024)

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica, respectivamente, de los condenados DIONISIO BECERRA GUIO alias "*Dubán, Robin*", RITO ANTONIO RUEDA MELO alias "*Petete o Piti*", JOSÉ AGUSTÍN CAÑÓN GONZÁLEZ alias "*Miguel o Rambo*" y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias "*Chiqui o Alexander*", en contra del auto de 30 de junio de 2023, proferido por el Juzgado con función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, por medio

del cual fijó en 4 años el término de libertad a prueba, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la precitada providencia.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

1. El 19 de diciembre de 2018 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá dictó sentencia condenatoria en contra de DIONISIO BECERRA GUIO alias “*Dubán, Robin*”, RITO ANTONIO RUEDA MELO alias “*Petete o Piti*”, JOSÉ AGUSTÍN CAÑÓN GONZÁLEZ alias “*Miguel o Rambo*” y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias “*Chiqui o Alexander*”, entre otros exmiembros del Bloque Central Bolívar (BCB), imponiéndole la pena principal de 480 meses de prisión, a excepción de RUEDA MELO que fue de 126 meses, y multa de 16.150, 9.525, 18.432 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, respectivamente, así como la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 240 meses, salvo RUEDA MELO que fue de 126 meses; que suspendidas, se sustituyeron por una pena alternativa de 8 años (96 meses), respectivamente, por la comisión de los delitos cometidos durante y con ocasión del conflicto armado interno¹.

2. La anterior decisión fue apelada y mediante sentencia de 3 de marzo de 2021, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otras determinaciones, confirmó la referida condena.

3. A DIONISIO BECERRA GUIO alias “*Dubán, Robin*”, RITO ANTONIO RUEDA MELO alias “*Petete o Piti*”, JOSÉ AGUSTÍN CAÑÓN GONZÁLEZ alias “*Miguel o Rambo*” y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias “*Chiqui o Alexander*”, les fue sustituida la medida de aseguramiento de detención preventiva el 8 de octubre de 2019, 18 de marzo de 2019, 16 de abril de

¹ **BECERRA GUIO:** 1 concierto para delinquir, 1 homicidio en persona protegida, 1 desaparición forzada y 1 destrucción y apropiación de bienes.

RUEDA MELO: 1 concierto para delinquir.

CAÑÓN GONZÁLEZ: 1 concierto para delinquir, 2 homicidios en persona protegida, 1 exacciones y 1 amenaza.

GALLARDO JAIMES: 1 acto de terrorismo, 147 homicidios en persona protegida, 8 homicidios en persona protegida en la modalidad de tentado, 1 homicidio agravado, 1 homicidio simple, 34 desapariciones forzadas, 47 torturas, 101 desplazamientos forzados, 2 exacciones, 22 destrucciones o apropiaciones de bienes, 59 secuestros, 1 secuestro agravado, 1 secuestro extorsivo, 1 constreñimiento, 12 amenazas y 6 reclutamientos.

2018 y 10 de agosto de 2016, respectivamente, por la magistratura con función de control de garantías de las Salas de Justicia y Paz.

Se vincularon al proceso de reintegración con la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) el 15 de octubre de 2019, 2 de abril de 2019, 3 de mayo de 2018 y 8 de noviembre de 2016, individualmente.

El 7 de abril de 2022, 29 de junio de 2023, 16 de junio de 2022 y 19 de mayo de 2022, respectivamente, ante el Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, suscribieron el acta de compromiso frente al cumplimiento de las obligaciones impuestas en la sentencia.

4. El Juzgado de Ejecución de Sentencias de esta especialidad avocó conocimiento de la vigilancia de las penas impuestas el 7 de mayo de 2021.

III. DECISIÓN IMPUGNADA

Mediante providencia de 30 de junio de 2023 el Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional fijó en 4 años² el término de libertad a prueba a DIONISIO BECERRA GUIO alias “*Dubán, Robin*”, RITO ANTONIO RUEDA MELO alias “*Petete o Piti*”, JOSÉ AGUSTÍN CAÑÓN GONZÁLEZ alias “*Miguel o Rambo*” y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias “*Chiqui o Alexander*”, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la precitada providencia.

El sustento de esta determinación estribó en la aplicación del precedente horizontal y vertical. El primero, por cuanto desde su creación legal esa Judicatura siempre ha aplicado el mismo criterio en los casos en los que ha ejercido vigilancia. Y el segundo, porque la Sala Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en los radicados 45.321 de 16 de diciembre de 2015 y 47.209 de 5 de octubre de 2016, señaló que este derecho no se adquiere de manera automática con el paso del tiempo, como sucede en la jurisdicción ordinaria, dado que en el proceso especial de Justicia y Paz es necesario

² Equivalen a la mitad de la pena alternativa impuesta.

comprobar el cumplimiento de los deberes de contribución a la reparación integral de las víctimas por parte de los postulados, así como las obligaciones impuestas en el fallo transicional, que justamente verifica el juzgado de ejecución de sentencias en las audiencias de vigilancia.

Advirtió el *a-quo*, que la Sala de conocimiento de Justicia y Paz de Barranquilla viene aplicando el precedente de la referida alta Corporación.

IV. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS NO RECURRENTES

1. Recurrentes

La defensa técnica del postulado **DIONISIO BECERRA GUIO** alias "**Dubán, Robin**"³, impugnó la decisión del *a-quo*, por inconformidad frente al momento en que se inicia la contabilidad del término de libertad a prueba, solicita se revoque el numeral primero del proveído.

Manifiesta que la juez de instancia, basó su argumento en tres providencias emitidas por la Sala de Conocimiento del Tribunal Superior de Barranquilla, de fechas: 23 de junio de 2020, 21 de julio de 2020 y 18 de junio de 2021; e igualmente hizo referencia a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia dictada en el radicado 45321 del 16 de diciembre de 2015.

Sin embargo, argumenta que de esta forma no se contrastaron las providencias donde fue ponente la magistrada doctora Alexandra Valencia Molina, de fechas: 26 de abril de 2022 (radicado 2015-00014) y 23 de abril de 2023 (radicado 2013-00011), que resolvieron el problema jurídico planteado indicando que el momento de inicio del cómputo para la libertad a prueba es a partir de la vinculación al programa de la ARN, siendo ésta última postura más favorable para los postulados.

Por lo anterior, refiere que, conforme al principio de favorabilidad, debe aplicarse tal argumento a las actuaciones y/o decisiones adoptadas por el

³ Registro de audio y video 0002Audio, récord: 2:03:00

Juez de Ejecución de Sentencias, al encontrarse jerárquicamente y funcionalmente en un rango inferior.

Por tanto, arguye, que no es válido el argumento de aplicar un precedente vertical de fecha anterior, cuando ya existe una nueva postura al respecto, que además garantiza o propicia mejores condiciones en materia de derechos a los postulados, quienes no pueden encontrarse vinculados de forma perpetua a este sistema legal transicional.

La defensa técnica del postulado RITO ANTONIO RUEDA MELO alias “Petete o Piti”⁴, solicita se revoque la decisión del *a-quo*, frente al instante en que inicia el cómputo de la libertad a prueba, toda vez que se está desconociendo el inciso 4° del artículo 29 de la Ley 975 de 2005, que en su decir, no debe ser interpretado de forma diferente a su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu (artículo 27 y 28 del código civil), en este caso, la norma es clara en establecer que una vez superado el tiempo de la pena alternativa, el postulado pasa a un periodo de libertad a prueba, mismo que está previsto por un término de la mitad de la que cumplió en prisión, es decir 4 años..

Deprecia que el conteo para establecer el término desde que inició la libertad a prueba se realice desde el día siguiente en que su defendido recobró la libertad, aclarando que debe aplicarse el principio *pro homine*, en el entendido que el postulado ya cumplió la pena alternativa impuesta.

Su impugnación la respaldó en la decisión de 3 de junio de 2021, radicado 2007-83019 (radicación interna: 2018-00355), de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, por tanto, manifiesta que negar lo anterior, sería desconocer la dignidad humana.

Lo anterior guarda concordancia con los artículos 1°, 28 y 29 de la Constitución Nacional. Toda vez que dicha normatividad computa una pena alternativa máxima de 8 años para los postulados que se acogieron a esta jurisdicción transicional, estando plenamente superada con creces por su representado. Así, un Magistrado de esta especialidad, con funciones de

⁴ *Ibidem*, récord: 2:14:14

control de garantías, le aprobó la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, por una no privativa, recobrando su libertad a partir del 18 de marzo de 2019.

Refiere que los preceptos mencionados son claros y contundentes, por tanto, no pueden ser interpretados de forma diferente por el operador judicial. Así, lo acota la Corte Constitucional en sentencia SU126 de 2022, que indica sobre la necesidad de que la interpretación normativa prevalezca, garantice o favorezca, los derechos del extremo más débil de la relación Estado-Ciudadano.

La defensa técnica del postulado JOSÉ AGUSTÍN CAÑÓN GONZÁLEZ alias “Miguel o Rambo”⁵, indica que la decisión del *a-quo*, afecta el mandato establecido en el artículo 13 constitucional, el debido proceso señalado en la Ley 975 de 2005, y está asumiendo la postura más desfavorable para los postulados.

Refiere que los acogidos a Justicia y Paz en el momento de su postulación, lo hicieron bajo el entendido de que se respetase lo acordado en el proceso de paz, donde se estableció, la pena máxima alternativa de 8 años y el periodo de libertad a prueba de 4 años.

Elucidó que la decisión acertada ya está fijada en providencia del Tribunal y esta no debe desconocerse (radicado 2007-83019 Magistrada Ponente Dra. Alexandra Valencia Molina), allí la Sala abordó el mismo problema jurídico, resolviendo que es a partir de la vinculación a la ARN el momento desde el cual debe predicarse el conteo de la libertad a prueba, según se desprende de una interpretación teleológica del artículo 29 de la Ley 975 de 2005.

Por consiguiente, solicita revocar los ordinales primero y cuarto de la providencia de primera instancia y, en su lugar, se contabilice el término de libertad a prueba conforme lo sustentó y se declare cumplido dicho estatuto.

⁵ *Ibidem*, récord: 2:38:48

La defensa técnica del postulado WILLIAM GALLARDO JAIMES alias “Chiqui o Alexander”⁶, manifiesta que impugna la decisión adoptada por el *a-quo*, por inconformidad con el momento en que inicia el conteo del termino de libertad a prueba.

Solicita que el conteo se realiza desde la vinculación a la ARN, es decir el 8 de noviembre de 2016, momento en que su defendido se acoge a la ruta de re-incorporación y honra los compromisos adquiridos para su permanencia en la jurisdicción transicional, en concordancia con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 975 de 2005.

Realiza hincapié en que su defendido fielmente asistió a las citaciones dispuestas por la ARN, tanto que su proceso ya finalizó satisfactoriamente conforme lo expuso el delegado de tal Institución, en el informe vertido a su turno.

Igualmente numera que el artículo 1° de la Constitución Nacional señala el principio inquebrantable de la dignidad humana que debe revestir todas y cada una de las decisiones adoptadas por el sistema de administración de justicia, así como el artículo 2° *ibidem*, que predica la eficiencia en dicha toma de decisiones, el artículo 28 *idem*, demarca la libertad como pilar fundamental y presupuesto para el disfrute de todos los demás derechos fundamentales; mismo que se estaría quebrantando con la decisión adoptada por el *a-quo*, adiciona que el artículo 29 de la Carta Magna, respecto al debido proceso exige que las actuaciones desplegadas por los entes judiciales eviten las dilaciones indebidas de tiempo, y en caso de existir, deben resolverse a favor de los asociados, menciona que el artículo 93 de la misma Carta, incorpora los tratados internacionales como parte del denominado bloque de constitucionalidad, entre ellos, el Pacto Internacional de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que reafirman los preceptos antes señalados.

Sobre la Ley 975 de 2005, refiere los artículos: 1°, sobre la paz total y 62, que habla de la complementariedad, en especial la aplicación del Código de Procedimiento Penal.

⁶ *Ibidem*, récord: 2:48:14

Su oposición la respaldó con las decisiones producidas por el Tribunal en distintos proveídos, verbigracia, 28 de octubre de 2021, radicado 2014-00103, 3 de junio de 2021, radicado 2018-00355, 27 de septiembre de 2021, radicado 2013-00311 y 25 de abril de 2023, radicado 2007-83019, de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá. Finalmente, solicita revocar la decisión del *a-quo*, toda vez que su defendido a honrado los compromisos desde su postulación a la Ley 975 de 2005, y fijar el término de libertad a prueba acorde lo sustentó.

2. No recurrentes

La Fiscalía 100 Especializada de apoyo a la Fiscalía 52 delegada ante la Sala de Justicia y Paz⁷, pidió que el término de la libertad a prueba concedida al postulado WILLIAM GALLARDO JAIMES se cuente desde el momento de la vinculación a la ARN, toda vez que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá se pronunció en ese sentido, entre otros, el 27 de septiembre de 2021.

La delegada de la Procuraduría General de la Nación⁸, adujo, que solicita por parte del Tribunal, realizar un pronunciamiento respecto de este punto que es, establecer o señalar a partir de qué momento se debe hacer efectiva la libertad a prueba que ha sido concedida. Su postura es, que debe ser desde el momento en que se logra la incorporación del postulado a la ARN, toda vez que es a partir de allí que vienen cumpliendo con las obligaciones que se verificaron en la audiencia.

Empero, como no existe unidad de criterios debe clarificarse para la seguridad jurídica de los postulados, sobre todo por las consecuencias adversas que representa para cada uno de ellos, el momento en que debe iniciar a contabilizarse dicho término.

⁷ *Ibidem*, récord: 2:56:30

⁸ *Ibidem*, récord: 2:58:00

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con el artículo 478 del Código de Procedimiento Penal, las decisiones de los juzgados de ejecución de penas relacionadas con la suspensión de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación son apelables ante la autoridad judicial que profirió la condena de primera o única instancia.

Con base en lo anterior, este despacho es competente para conocer la impugnación interpuesta por la defensa técnica de los condenados DIONISIO BECERRA GUIO alias "*Dubán, Robin*", RITO ANTONIO RUEDA MELO alias "*Petete o Piti*", JOSÉ AGUSTÍN CAÑÓN GONZÁLEZ alias "*Miguel o Rambo*" y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias "*Chiqui o Alexander*", frente al conteo del término de libertad a prueba, comoquiera que fungió como ponente de la sentencia por medio de la cual los precitados, entre otros desmovilizados del BCB, fueron condenados parcialmente el 19 de diciembre de 2018.

2. Metodología y estructura de la providencia

Para resolver la impugnación planteada y determinar a partir de cuándo la autoridad judicial que vigila el cumplimiento de la sentencia transicional debe contabilizar el término de la libertad a prueba, se analizará el referido instituto a la luz de la norma que lo regula y pronunciamientos proferidos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá.

Esclarecido y determinado razonablemente el momento a partir del cual comienza a correr el periodo de libertad a prueba, el mismo se aplicará al caso concreto y se adoptará la decisión que en derecho corresponda.

De antemano se advierte, que este análisis modulará en clave constitucional el fundamento jurídico de la providencia proferida por esta Sala de decisión el 28 de octubre de 2021, radicado 2014-00103, mediante la cual se resolvió el problema jurídico bajo el criterio hermenéutico de contabilizar el término de libertad a prueba a partir de la firma del acta de compromiso por parte del postulado condenado, en punto del cumplimiento de las obligaciones

impuestas en la sentencia.

3. De la libertad a prueba

3.1 Este derecho está regulado en los incisos 4º y 5º del artículo 29 de la Ley 975 de 2005 y se adquiere tras el cumplimiento de **(i)** la pena alternativa impuesta en la sentencia transicional y **(ii)** las obligaciones igualmente determinadas en el fallo condenatorio. Quiere decir, que esta garantía no surge de manera automática, sino que está precedida de la necesaria y obligatoria comprobación de los antedichos requisitos legales.

La normativa establece:

«Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, período durante el cual el beneficiado se compromete a no reincidir en delitos, a presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de residencia»⁹.

Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el periodo de prueba, se declarará extinguida la pena principal. En caso contrario, se revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal que correspondan» (destaca el Despacho).

Ahora bien, dadas las particularidades especiales del proceso de Justicia y Paz, es probable que el requisito cuantitativo se cumpla en tres escenarios diferentes, a saber: **a)** antes de que la jurisdicción transicional profiera sentencia (que puede ser parcial); **b)** luego de proferirse el fallo, pero previo a que alcance ejecutoria; **c)** posterior a la firmeza de la condena.

En las dos primeras hipótesis, todavía no puede hablarse ni se activa, en estricto sentido, el instituto de la libertad a prueba, pero los derechos del postulado se garantizan a través de la sustitución de la medida de aseguramiento y por vía del artículo 18A de la Ley 975 de 2005, cuando cumple en detención preventiva el tiempo máximo establecido para la pena

⁹ En la sentencia C-370 de 2006 la Corte Constitucional declaró inexecutable algunos apartes de este inciso. En este orden de ideas, como la consecuencia jurídica de dicha declaratoria es el retiro del ordenamiento jurídico de los presupuestos, oraciones o frases que contravienen la Carta Política, estos no se transcribieron.

alternativa.

Lo anterior, en manera alguna significa que, en el evento que al postulado le otorguen el sustituto de la medida de aseguramiento, posteriormente, tras ser condenado y adquirir firmeza el fallo, no sea necesario examinar si tiene derecho a la libertad a prueba; siendo indefectible para su concesión, por principio de legalidad, la comprobación del segundo requisito del inciso 4º del artículo 29 *ibídem*, esto es: el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la sentencia, función que le compete al Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional¹⁰.

Parece evidente, en principio, que la magistratura de Justicia y Paz debe proferir sentencia y esta encontrarse en firme (acto antecedente) para que la judicatura que la vigila y ejecuta, verifique el cumplimiento del segundo requisito de orden legal, esto es, las obligaciones impuestas en el fallo (acto consecuente).

Tal afirmación, pese a su obviedad y sin temor a su insistencia, es necesario precisarlo, pues resultaría contrafáctico, y si se quiere imposible, comprobarlo antes de emitir dicha providencia, así el postulado tenga la carga y el compromiso de honrar las obligaciones propias de la Ley de Justicia y Paz para ser aceptado, permanecer en la jurisdicción transicional y cumplir los requisitos de elegibilidad (arts. 10 y 11 *ibídem*), que justamente permiten emitir sentencia en su contra y ser destinatario de los beneficios de la alternatividad penal (art. 3 *ibídem*).

3.2 En este propósito es fundamental recordar que, este proceso especial transicional es progresivo y la verificación de la voluntad de paz¹¹ y contribución efectiva se torna permanente y en distintas etapas del proceso, tanto administrativo como judicial, desde el inicio y hasta el final, en consideración a que es indispensable constatarla en el acto mismo de

¹⁰ Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 16 de diciembre de 2015, radicado 45.321. Dicha competencia funcional no es solo por virtud del artículo 32 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 28 de la Ley 1592, sino porque en la práctica no puede hablarse de libertad a prueba si el fallo por medio del cual se impusieron, tanto la pena alternativa como las respectivas obligaciones inherentes al proceso de Justicia y Paz, no ha quedado en firme.

¹¹ La resocialización es una manifestación de la voluntad de paz, pero no la agota en su totalidad.

desmovilización y para la postulación por parte del Gobierno Nacional; también, en la formulación de imputación, la audiencia concentrada y, como ya se dijo, previo a la emisión de la sentencia condenatoria.

Ejemplo dicente de lo anterior, es la figura de la terminación anticipada del proceso por exclusión de lista de configurarse en el decurso procesal especial alguna de las causales previstas en el artículo 11A de la Ley 975 de 2005. De lo contrario, es decir, si solo bastara la primigenia manifestación de la voluntad de paz por parte del postulado y esta abarcara todo el trámite, el instituto de la exclusión perdería total sentido.

La misma prerrogativa y potestad progresiva se ejerce en fase de ejecución de la pena y es indispensable para mantener los beneficios, al punto que nuevamente se comprueba para la concesión de la libertad a prueba y para fijar el término de ese derecho, en tanto la ley faculta al tribunal fallador a imponer nuevas obligaciones en la sentencia, que de no verificarse en esa última etapa procesal (fase ejecutiva), inexorablemente conducen a la negación del derecho aludido y la consecuente pérdida de beneficios.

Por tanto, de ninguna manera puede predicarse que la voluntad de paz, expresada en pretéritas fases del proceso, es suficiente para mantener los beneficios de la justicia transicional hasta el final y para el otorgamiento de la libertad a prueba en la etapa ejecutiva, ya que es factible que dicha voluntad se quiebre con el paso del tiempo, por ejemplo, contraviniendo las obligaciones asignadas en el fallo condenatorio, que de suyo, es suficiente para negar el derecho, revocarlo e incluso para expulsar al postulado del trámite de Justicia y Paz, tal como lo establece el inciso 5º del artículo 29 *ibídem*.

3.3 Tan es así, que el artículo 44 de la Ley de Justicia y Paz, modificado por el artículo 29 de la Ley 1592 de 2012, determina que en la sentencia se puede imponer u obligar al postulado a llevar a cabo los actos de contribución a la reparación integral allí enlistados. Y remata en el párrafo indicando que: «*La libertad a prueba estará sujeta a la ejecución de los actos de contribución a la reparación integral que hayan sido ordenados en la sentencia*» (destaca la Sala), lo que, como se ha venido insistiendo, solo es

posible hacer posterior a su emisión y no antes (es imposible).

Esto guarda concordancia con el criterio jurisprudencial fijado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 16 de diciembre de 2015, radicado 45.321, en el entendido que *«la concesión de la libertad a prueba no se produce automáticamente por el simple transcurrir del tiempo en el que se ejecuta la pena impuesta en la sentencia, a diferencia de lo que ocurre en el proceso penal ordinario, ya que en el trámite transicional se involucra el cumplimiento de obligaciones específicas»* (destaca la Sala), porque de cara a este instituto, *«es menester verificar el cumplimiento de los actos de contribución a la reparación integral ordenados en la sentencia y demás cargas impuestas en la misma»*.

3.4 Esta consideración tampoco significa que el cumplimiento de las obligaciones y su verificación sean lo mismo y se lleven a cabo en un solo momento, en tanto lo primero es previo y emana de la voluntad y compromiso del postulado; mientras lo segundo, es posterior y se hace en desarrollo de un deber legal de la judicatura y, por antonomasia, en un acto procesal específico.

Así, el postulado puede cumplir con las órdenes de contribución a la reparación integral, las manifestaciones de disculpas públicas e ingreso al proceso de reincorporación de la ARN, impuestas en el fallo transicional en firme, pero el Juzgado de Ejecución de Sentencias, tiempo después, hacer la respectiva comprobación.

Incluso, esta expresión voluntaria del postulado puede materializarse y verificarse previo a la emisión de la sentencia transicional, cobrando sentido la función facilitadora, de orientación y acompañamiento desarrollada por la ARN, que se convierte en insumo significativo y definitivo para la confirmación que hace la judicatura que vigila el cumplimiento de las sanciones y obligaciones del desmovilizado condenado.

Luego, es probable que el lapso entre el cumplimiento efectivo y la verificación sea prolongado, lo que puede obedecer a diversos motivos, como por ejemplo, la realización de todas las cargas funcionales asignadas

al juzgado ejecutor, mismas que son interpretadas altas, si se tiene en cuenta que solo hay un despacho para ejecutar y vigilar todas las providencias dictadas por la integralidad de las Salas de Justicia y Paz del territorio nacional (Bogotá, Medellín y Barranquilla), cuyos mandatos, hechos del conflicto armado, víctimas y postulados, suelen contarse por miles, siendo diferente la situación jurídica de cada desmovilizado, pero igual de importante.

3.5 Esta hermenéutica, de suyo garantista y basada en el principio *pro personae*¹², permite a la Sala establecer sin dubitación, que el término de libertad a prueba no puede contarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia en que se fija, por cuanto puede transcurrir un periodo importante entre la expresión de la voluntad del postulado de honrar las obligaciones impuestas en la sentencia (o que se impondrán) y la verificación que hace la Judicatura que vigila el efectivo cumplimiento de los imperativos de contribución a la reparación integral y la búsqueda del fin último del Acuerdo de Paz.

De ahí que por razones constitucionales¹³, que devienen de los principios *pro libertate* y de plazo razonable, no se pueda cargar dicho tiempo (ya sea mucho o poco) a la parte más débil de la relación Estado-ciudadano, esto es, al postulado, en la medida que no está en el deber jurídico de soportarlo.

Es improrrogable, entonces, **reconocer el derecho a partir del momento en que efectivamente se adquirió, es decir, cuando el destinatario se vinculó al proceso de la ARN, dado que allí manifiesta inequívocamente su voluntad de honrar las obligaciones impuestas o que se impondrán en la sentencia**, pues tal expresión y compromiso de contribución a la consecución de la paz, solamente depende de él y no de la concreción de algún acto jurídico o formalidad de una autoridad estatal, que, se insiste, no es atribuible a aquel. Lo anterior, sin perjuicio de que el Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz lo constate con posterioridad y de acuerdo con su agenda.

¹² También conocido como: *pro homine*.

¹³ Es un fin esencial del Estado garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, conforme el artículo 2 de la Carta Política.

Téngase en cuenta, además, que el principio *pro personae* se sustenta y desarrolla en la prevalencia de la aplicación de la *norma* más favorable o la *interpretación* más amplia en punto de la garantía y protección de los derechos humanos, que en el análisis específico que concentra a la Sala, se compendia prefiriendo el sentido más vasto, protector y garantista de la norma concernida, esto es, se itera, **partiendo del hecho cierto e inequívoco que es la expresión de la voluntad del postulado de honrar los compromisos del Acuerdo de Paz de la Ley 975 de 2005 cuando se vincula a la ARN**; acto que, además, está precedido y amparado por el principio constitucional de buena fe (art. 83).

Vale aclarar, que el denotado acto de vinculación a la ARN es obligatorio, como lo afirma el artículo 66 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 35 de la Ley 1592 de 2012, y concreta uno de los fines del proceso penal transicional y especial, cual es, la reintegración particular diferenciada del postulado; cuyos requisitos, características, condiciones y obligaciones, son definidas por la señalada agencia por mandato del artículo 95 del Decreto 3011 de 2013¹⁴.

En ejercicio de esa facultad legal, la ARN estableció en el artículo 2 de la Resolución 1962 de 2018¹⁵, la presentación personal, posterior e ineludible del postulado en el plazo perentorio de 30 días calendario, siguientes a la ejecutoria de la decisión judicial que concedió la libertad efectiva, con el fin de dar inicio al proceso y ruta de reincorporación social.

Esto permite colegir, que no basta con la sustitución de la medida de aseguramiento y/o la materialización de la libertad para comenzar a contabilizar el término de libertad a prueba, toda vez que si el desmovilizado no se presenta, se configura el supuesto de hecho para activar el parágrafo 2 de la precitada norma, es decir, informar a las autoridades judiciales y/o administrativas el incumplimiento de los compromisos del proceso de Justicia y Paz, así como de las obligaciones impuestas en la sentencia.

¹⁴ Artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1069 de 2015.

¹⁵ Modificó el artículo 2 de la Resolución 1724 de 2014.

Por razón de ello, no es posible contabilizar el término de libertad a prueba desde el momento en que se sustituye la medida de aseguramiento y/o se materializa la libertad del postulado, por cuanto a partir de ese instante, comienza a correr para aquel el plazo ineludible de 30 días calendario para honrar el compromiso de paz estable y duradera, acudiendo de forma voluntaria a la ARN para iniciar la ruta de reintegración particular diferenciada¹⁶.

3.6 De esta misma línea hermenéutica se deduce que, una cosa es la imposición de obligaciones por parte de la judicatura en la sentencia y otra el cumplimiento de estas a partir del señalado acto del Tribunal de Paz. En otras palabras, las señaladas condiciones son propiciadas por el cuerpo colegiado para que el desmovilizado que expresó su voluntad de reconciliación, reparación y readaptación social, las materialice (acto voluntario que, como viene de verse, puede ser previo). Ante esto, es fundamental verificar la plena disposición del postulado, toda vez que este interregno o plazo no le es atribuible (no depende de él).

Por tanto, se precisa ineludible establecer si es constitucional que el postulado cargue con el peso procesal y temporal que requiere: **primero**, la emisión de la sentencia que impone los deberes y permite contabilizar el término del precitado derecho; **segundo**, la firmeza del fallo; y **tercero**, la asunción del conocimiento por parte del Juzgado de ejecución de sentencias, así como la disposición de agenda y fijación de audiencia para la respectiva verificación. También, si en aplicación de principios constitucionales (como el de plazo razonable), el desmovilizado está en el deber jurídico de soportar tal contingencia o solo basta con la expresión inequívoca de su compromiso con el Proceso de Justicia y Paz, conforme se interpreta de su ingreso y puesta a disposición de la ARN para el inicio de la ruta de reincorporación.

Ante esto, la respuesta de esta Sala de decisión, en comprensión amplia, protectora y garantista de los derechos constitucionales, es que sin duda dicho término no debe ser soportado por el postulado y tal situación de aparente indefinición jurídica, debe ser interpretada a favor de las prerrogativas fundamentales a una pronta y cumplida justicia, libertad

¹⁶ Tanto el compromiso, como presentarse a la ARN, son obligatorios.

personal, buena fe y no aprovechamiento de las condiciones de superioridad por parte de la autoridad, toda vez que la confianza legítima de los firmantes del Acuerdo de Paz concretado en la Ley 975 de 2005 y de la sociedad en general, puede ser defraudada con interpretaciones restrictivas, como la que fue objeto de alzada; ya que las vicisitudes que han impedido el fortalecimiento y culminación de la investigación, juzgamiento y reparación integral de los hechos del conflicto armado interno, no son de la órbita de competencia ni de iniciativa del excombatiente que voluntariamente dejó las armas y se sometió a este régimen transicional especial.

Sin duda, es sustancial aclarar que esto es reglado y que el cumplimiento de los compromisos propios de la ley (que incluye las obligaciones impuestas en la sentencia¹⁷, porque se contempla en el artículo 29 *ibídem*), debe ser vigilado y comprobado progresiva y constantemente mientras el postulado esté por cuenta del proceso especial, so pena de perder los beneficios, como por ejemplo, la alternatividad penal. Sin embargo, se enfatiza, que la facultad y deber de vigilancia por parte del Estado, no es indefinido ni indeterminado, tampoco perpetuo.

3.7 Esto armoniza con el contenido *ius* fundamental del artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto la finalidad esencial de la pena de prisión en un Estado social de derecho debe ser siempre «(l)a reforma y readaptación social de los penados», con pleno reconocimiento del plexo de garantías fundamentales; teleología que se desestructura y trunca cuando se imponen cargas excesivas a los condenados, que en manera alguna deben soportar, máxime cuando ni siquiera fueron previstas en el ordenamiento jurídico.

También, concuerda y se complementa con los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados y proclamados por la Asamblea

¹⁷ Que son específicas y derivan de las obligaciones generales previstas en el Acuerdo de Paz –Ley 975 de 2005–, a saber: aporte a la verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición, que se concretan, por ejemplo, en una reincorporación diferenciada y eficaz del concernido. Estas, a su vez, tienen ligamen directo con los requisitos de elegibilidad y, en otras palabras, se traducen en: «(...) *continuo balance desde el momento mismo de la reincorporación del postulado a este sistema de justicia transicional*» y hasta su culminación. Cfr. Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, providencia de 27 de septiembre de 2021, radicado 2013-00311.

General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 45/111 de 14 de diciembre de 1990, en la medida que el No. 10 elocuentemente indica que, «(c)on la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones sociales, y con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se crearán condiciones favorables para la reincorporación del ex recluso a la sociedad en las mejores condiciones posibles».

Luego, obstáculos de índole no legal y/o de aplicación o interpretación restrictiva, que evidentemente no acompañan ni superan una hermenéutica garantista y favorable, no solo para la persona que afronta una situación severa de privación de la libertad, sino de aquella que superó lo anterior y quiere readaptarse y reincorporarse a la sociedad, pueden traducirse como forma de discriminación o parcialidad, que conspira contra los principios No. 2 y 11 y pueden generar consecuencias nocivas para el sujeto de derecho de especial protección, la sociedad y el Estado.

3.8 Por último, el criterio acogido sistematiza con la postura jurisprudencial de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, plasmado en la providencia de 12 de julio de 2022, radicado 61.471, que reiteró palmario que la finalidad constitucional de la pena de prisión es la resocialización como garantía de la dignidad humana, pues debe ser vista más allá de un trivial y simple castigo, y se hace presente en las distintas etapas del proceso penal, siendo que, «en la fase de ejecución de la pena, ésta debe guiarse por las ideas de resocialización y reinserción sociales¹⁸». Dicho razonamiento fue tomado de la sentencia de tutela STP15806-2019, radicado 683.606, emanada del mismo máximo tribunal.

Así, se cristaliza la intención de la justicia transicional que, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, busca hacer un tránsito pacífico de la guerra a la convivencia serena y duradera (y de las dictaduras a las democracias), evitar la repetición de hechos vulneradores de derechos humanos y reconstruir el tejido social afectado tras largos años de desestructuración por y como consecuencia del conflicto armado; con el propósito último y loable de hacer realidad la reconciliación nacional.

¹⁸ Claus Roxin, “Culpabilidad y prevención en Derecho Penal”, Traducido por: F. Muñoz Conde, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1981, p. 47.

Virtud que, oportuno es resaltarla, tuvo en cuenta el Estado al inspirar la negociación y los acuerdos en la facilitación de los procesos de paz y la reincorporación individual, colectiva y condicionada de los miembros de los GAOML; materializando y concretando el contenido trascendente del derecho a la Paz del artículo 22 de la Constitución Política que, a su vez, dio frutos en la Ley 975 de 2005, dando paso al proceso especial y excepcional que hasta hoy ha permitido, con grandes esfuerzos y ciertas dificultades, que los destacados fines sean realidad; dato fáctico, tal vez, subvalorado en la actualidad, pero cimiento y modelo en el ámbito doméstico y foráneo en los venideros días.

4. Caso concreto

4.1 En el caso puesto a consideración de la Sala, se parte del hecho que DIONISIO BECERRA GUIO alias “*Dubán, Robin*”, RITO ANTONIO RUEDA MELO alias “*Petete o Piti*”, JOSÉ AGUSTÍN CAÑÓN GONZÁLEZ alias “*Miguel o Rambo*” y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias “*Chiqui o Alexander*”, satisficieron los presupuestos para la concesión de la libertad a prueba previstos en el artículo 29 de la Ley 975 de 2005, esto es, (i) pagaron la pena alternativa impuesta por este Tribunal en la sentencia de 19 de diciembre de 2018 y (ii) cumplieron las obligaciones determinadas en el precitado fallo.

Tal verificación la hizo el Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional en el auto de 30 de junio de 2023¹⁹ y no fue objeto de apelación. Por tanto, atendiendo el principio de limitación, este aspecto no será analizado y se entienden superados los requisitos de orden legal.

4.2 Así las cosas, el examen se contrae a establecer el momento a partir del cual debe contabilizarse el periodo de la libertad a prueba concedida a DIONISIO BECERRA GUIO alias “*Dubán, Robin*”, RITO ANTONIO RUEDA MELO alias “*Petete o Piti*”, JOSÉ AGUSTÍN CAÑÓN GONZÁLEZ alias “*Miguel o Rambo*” y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias “*Chiqui o*

¹⁹ Archivo 0001AutoDSJ30-06-2023.pdf

Alexander”, que como fue expuesto y sustentado en *supra* 3.4 y 3.5, se hace a partir del momento en que efectivamente se adquirió el derecho, es decir, **cuando el postulado se vincula al proceso de la ARN, dado que en ese acto manifiesta inequívocamente su voluntad de honrar las obligaciones impuestas o que se impondrán en la sentencia.**

En este orden de ideas, en el auto de 30 de junio de 2023 el Juzgado ejecutor señaló que las obligaciones impuestas en la sentencia condenatoria estaban dispuestas en el numeral 4.9 de la parte motiva y en los ordinales **OCTOGÉSIMO SEGUNDO** y **CENTÉSIMO QUINCUGÉSIMO** de la parte resolutive.

En cuanto a las enlistadas en la parte motiva, el *a-quo* determinó que estaban satisfechas y sustentó su posición en el análisis de resocialización y aprobación del magistrado con función de control de garantías de las Salas de Justicia y Paz cuando otorgó la sustitución de la medida de aseguramiento y en el acta de compromiso suscrita por el postulado ante ese despacho.

En lo que hace a las previstas en la parte resolutive, referentes al ofrecimiento de disculpas y pedimento de perdón, advirtió el *a-quo*, que los postulados remitieron escritos contentivos de lo anterior, por lo que corrió traslado a la Dirección Técnica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para que lo socializaran con las personas afectadas por los hechos del conflicto armado de la estructura armada a la que pertenecieron los desmovilizados y emitieran el respectivo concepto técnico, precisando, que si dicha oficina lo estimaba, debían corregirlos, previo a la publicación en un diario de amplia circulación nacional y regional. Es decir, los postulados también consumaron este compromiso impuesto en el fallo.

Adicionalmente, el Juzgado ejecutor les recordó en el proveído impugnado, que no bastaba con la simple verificación de exigencias en esta etapa procesal y con miras a obtener el beneficio de la libertad a prueba, toda vez que su deber con el proceso de Justicia y Paz es continuar honrando los

compromisos de participación y contribución con el esclarecimiento de la verdad.

Esto, evidentemente se aviene con lo planteado por la Sala en el acápite anterior, relativo a que la constatación de las obligaciones de la jurisdicción transicional es progresiva y permanente. A lo que se añade, que lo mismo se predica del imperativo de resocialización a través del proceso de reintegración especial de Justicia y Paz de la ARN, ya que, si no se respetan hasta el final, inexorablemente trae como consecuencia la pérdida de beneficios de la especialidad.

4.3 Por virtud de lo expuesto y como en este caso se logró determinar el efectivo cumplimiento de las obligaciones impuestas en la sentencia (adquisición del derecho) con la vinculación al proceso de la ARN el **15 de octubre de 2019** por parte de DIONISIO BECERRA GUIO alias "*Dubán, Robin*", el **2 de abril de 2019** por parte de RITO ANTONIO RUEDA MELO alias "*Petete o Piti*", el **3 de mayo de 2018** por parte de JOSÉ AGUSTÍN CAÑÓN GONZÁLEZ alias "*Miguel o Rambo*" y el **8 de noviembre de 2016** por parte de WILLIAM GALLARDO JAIMES alias "*Chiqui o Alexander*", será este, respectivamente, el momento procesal a partir del cual se contabilice el término de libertad a prueba para cada uno de ellos.

4.4 Se precisa, que no es oponible el argumento de que hasta el 30 de junio de 2023 el Juzgado corroboró los condicionamientos de la parte resolutive del fallo, comoquiera que en la decisión simplemente se les recordó y conminó a que continuaran honrándolos, so pena de perder los beneficios.

Tampoco, que los postulados acepten silentes el tiempo transcurrido entre la adquisición del derecho y la fecha en que la judicatura reconoció la libertad a prueba, toda vez que, como se indicó párrafos arriba, estos no tienen el deber jurídico de soportar las cargas y vicisitudes que se generan por la vigilancia de las penas a un número superlativo de postulados condenados.

4.5 Conclusión

Con base en lo anterior, la Sala modificará parcialmente el ordinal **PRIMERO** del auto de 30 de junio de 2023, proferido por el Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, en el entendido que el término de libertad a prueba se contará a partir de la adquisición del derecho con la vinculación al proceso de la ARN, esto es, del **15 de octubre de 2019** para DIONISIO BECERRA GUIO alias “*Dubán, Robin*”, el **2 de abril de 2019** para RITO ANTONIO RUEDA MELO alias “*Petete o Piti*”, el **3 de mayo de 2018** para JOSÉ AGUSTÍN CAÑÓN GONZÁLEZ alias “*Miguel o Rambo*” y el **8 de noviembre de 2016** para WILLIAM GALLARDO JAIMES alias “*Chiqui o Alexander*”.

Finalmente, la Sala también confirmará el ordinal **CUARTO** del auto de 30 de junio de 2023, esto es, la negativa de declarar cumplido el término de libertad a prueba, toda vez que no cuenta con elementos de juicio que le permitan discernir si los postulados continúan vinculados al trámite de Justicia y Paz en investigaciones o proceso parciales de esta jurisdicción transicional o si la Fiscalía les ha imputado otros hechos del conflicto armado interno cometidos durante su pertenencia al BCB.

Información que, en todo caso, puede obtener la primera instancia en su función de ejecución y vigilancia de las penas impuestas a los desmovilizados condenados; también en las audiencias de verificación del cumplimiento de las obligaciones y compromisos atribuibles a estos y por intermedio de la Fiscalía General de la Nación. La cual, una vez documentada, permitirá a la defensa elevar nueva solicitud en ese sentido y proporcionará a la Judicatura elementos cognoscitivos para adoptar la decisión que en derecho corresponda.

VI. En mérito de lo expuesto, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR parcialmente el auto de 30 de junio de 2023 proferido por el Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, en el entendido que el término de

libertad a prueba se contará a partir del **15 de octubre de 2019** para DIONISIO BECERRA GUIO alias "*Dubán, Robin*", el **2 de abril de 2019** para RITO ANTONIO RUEDA MELO alias "*Petete o Piti*", el **3 de mayo de 2018** para JOSÉ AGUSTÍN CAÑÓN GONZÁLEZ alias "*Miguel o Rambo*" y el **8 de noviembre de 2016** para WILLIAM GALLARDO JAIMES alias "*Chiqui o Alexander*", de acuerdo con la motivación de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás el auto de 30 de junio de 2023.

TERCERO: DEVOLVER la actuación al juzgado de origen.

Contra la presente decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase,



IGNACIO HUMBERTO ALFONSO BELTRÁN
Magistrado



ALEXANDRA VALENCIA MOLINA
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
OSHER HADITH HERNÁNDEZ ROA
Magistrada
Salvamento de Voto

Firmado Por:
Osher Hadith Hernandez Roa
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Justicia Y Paz
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e094f465f1c7c5bda5ba02d326722b311287c8fb83a425a7ecc6ca32e772ff18**

Documento generado en 15/03/2024 03:22:44 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>